

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Emperatriz Franco Márquez
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 023 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 023 2019 01034 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 057 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Adiciona y confirma

En la fecha, **treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la **AFP Porvenir S.A.** y el grado especial de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Emperatriz Franco Márquez**. Radicado único nacional 05001 3105 **023 2019 01034** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes de la Sala el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **008**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

La demandante, por conducto de su apoderada judicial, pretende se declare la nulidad del traslado efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad; en consecuencia, se condene a Porvenir S.A., a devolver a Colpensiones las cotizaciones y rendimientos financieros depositados en la cuenta de ahorro individual. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, nació el 11 de febrero de 1970, afiliándose al régimen de prima media con prestación definida el 01 de marzo de 1996, entidad en la que estuvo hasta octubre de 1999, cuando su empleador, sin mediar consentimiento, ni brindarle asesoría, la vinculó al régimen de ahorro individual con solidaridad; que le solicitó a Colpensiones la declaratoria de nulidad de su traslado, emitiéndosele respuesta negativa el 02 de octubre de 2019, por encontrarse a menos de 10 años de la edad pensional; que cuenta con 49 años y 1.087 semanas cotizadas.

En auto del **25 de octubre de 2019**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento, la edad con que cuenta la actora y el número de semanas, la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, la solicitud de retorno al régimen público y la respuesta emitida. Los demás supuestos no le constan, por lo que deben ser probados. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del traslado de régimen, inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado a la AFP Porvenir S.A., equivalencia del ahorro o diferencias pensionales, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, intereses moratorios

y/o de la condena a cargo de la AFP demandada Porvenir S.A., devolución de aportes debidamente indexados, devolución de cuotas de administración debidamente indexadas, buena fe de Colpensiones, prescripción, excepción innominada, compensación, imposibilidad de condena en costas, condena en costas y, la genérica.

La **AFP Porvenir S.A.**, frente a los hechos manifiesta que no son ciertos o no le constan. Explica que en virtud de lo establecido en el artículo 112 de la ley 100 de 1993, se encuentra en la obligación de recibir a todas aquellas personas que presenten solicitud de vinculación, adicional a que para el caso en el momento de la afiliación, así como durante la vigencia de esta, se ha dado una continua asesoría en relación con las condiciones del régimen acorde a la normatividad vigente, manteniendo enterados a los afiliados, de las distintas alternativas de ahorro, los cambios normativos, y, aspectos de relevancia en materia de seguridad social, a través de distintos canales (extractos trimestrales, medios de comunicación, página de internet, asesores comerciales). Así mismo, la parte demandante contó con la totalidad de canales, puntos físicos, telefónicos y electrónicos para efectos de solicitar asesoría. **Resistió las pretensiones**, expuso hechos, fundamentos y razones de su defensa y, formuló **las excepciones** de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y, buena fe.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito el 08 de febrero del año en curso, declarando la ineficacia de la afiliación de la señora **Franco Manrique** al RAIS, administrado por **Porvenir S.A.**, condenando a esta entidad a que, dentro del término de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión, traslade con destino a Colpensiones, el valor de la cuenta de ahorro individual de la actora, con sus respectivos rendimientos, incluidas las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes destinados al fondo

de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, debiendo remitir al momento de cumplir la orden impartida, la relación discriminada de los conceptos, y a que obedecen. Le ordenó a Colpensiones recibir las sumas que le sean giradas y las convierta en semanas cotizadas, teniendo a la actora afiliada sin solución de continuidad. Declaró no probadas las excepciones propuestas y, gravó con costas a la AFP Porvenir S.A., a favor del demandante, fijando el monto de las agencias en derecho.

Argumentó el fallador que la AFP demandada, no satisfizo la carga de la prueba de una información suficiente a la afiliada, resultando procedente declarar la ineficacia petitionada, la cual tiene como consecuencia que las cosas vuelvan al estado anterior, lo que implica la devolución a Colpensiones del valor de la cuenta de ahorro individual, con sus respectivos rendimientos, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública, quien será la encargada de asumir las futuras prestaciones económicas de la seguridad social, resultando intrascendente que esta hubiese percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa del fondo.

Inconforme con la decisión la **AFP Porvenir S.A., interpuso recurso de apelación**, indicando que cumplió con el deber de información vigente para 1999, época para la cual se brindaba una asesoría verbal, debiéndosele dar valor probatorio al formulario de afiliación. Que a la actora la motiva la obtención de un beneficio económico y no la falta al deber de información.

En caso de confirmarse la sentencia, pide se revoque la condena al traslado de cuotas de administración y seguros previsionales debidamente indexados, en tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, el descuento de dichos dineros lo que buscó fue compensar la labor ejercida por la entidad, la cual, para el caso, incrementó el monto de la cuenta de ahorro individual a través de unos rendimientos, resultando improcedente retrotraer lo realizado con dichas sumas, al tratarse de un

servicio que ya se consumó, y que no se encuentra en el patrimonio de la entidad. Afirma que, los rendimientos resarcen la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, resultando improcedente la indexación de los rubros a devolver, a más a que se generaría un enriquecimiento sin causa.

Insta para no ser condenada en costas al haber actuado de buena fe, a más de haber brindado una debida información acorde a las normas legales vigentes.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **Colpensiones**, solicitando la confirmación de la decisión de instancia, al estar en consonancia con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, esto es, con la sostenibilidad financiera del sistema, el cual es concebido como un derecho constitucional fundamental y como un servicio público de carácter obligatorio. Afirma que este principio representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los colombianos de manera sostenida e indefinida.

Adujo que no es posible imponerles a las administradoras, frente al tema de información, obligaciones no contempladas en la ley para la fecha de suscripción del formulario de afiliación, no obstante, de accederse a las pretensiones, insta para que se condene al fondo privado a trasladar los valores de la cuenta de ahorro individual, tales como, cotizaciones, bonos pensionales, títulos, rendimientos, intereses y cualquier concepto.

La **AFP Porvenir S.A.**, luego de transcribir la parte resolutive de la sentencia, expone como puntos materia de inconformidad: **1) declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS**, al no existir razones para ello, pues insiste en que brindó la debida asesoría de acuerdo con la normativa vigente, adicional la actora conto con varias oportunidades para retorno al régimen

público y no lo hizo, sin que la diferencia en el monto de la mesada sirva de sustento a lo pedido y sin que existiera, para la época del traslado, obligación de soportes adicionales al formulario, precisando que el buen consejo, doble asesoría e incluso desincentivar al afiliado de opción que no le beneficie, surgieron en los años 2010 y 2014, como se explica por la jurisprudencia especializada, avizorándose también incumplimiento de la accionante en sus deberes, debiéndose considerar también que la totalidad de condiciones del RAIS son impuestas por la Ley, cuyo desconocimiento o ignorancia no sirve de excusa. **2)** la condena a reintegrar a Colpensiones lo contenido en la cuenta de ahorro individual del demandante con sus correspondientes rendimientos, frutos e intereses, y el bono pensional si ya fue redimido, y así mismo con indexación, el traslado de lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima , los gastos de administración y el valor de las primas de seguro previsional y reaseguros, pues no se tienen en cuenta los frutos producidos que compensan lo descontado por gastos de administración, que además están autorizados por el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, y cumplieron su finalidad, y **3)** la condena en costas, pues no se valora su actuar ajustado a la buena fe y a las disposiciones legales vigentes.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A., donde actualmente permanece, y como consecuencia de ello, a la activación de la vinculación en el RPMPD administrado por COLPENSIONES, con las correspondientes restituciones económicas y los conceptos que estas comprenden, así como si hay lugar o no a su

actualización mediante el mecanismo de la indexación y a la imposición de costas procesales.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas que la movilidad entre regímenes debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, dado que el formulario se suscribió el 01 de octubre de 1999**, se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto el contenido mínimo estaba circunscrito a brindar ilustración sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye dar a conocer la existencia de ventajas y desventajas de cada uno, y supone el análisis de la situación particular de cada afiliado, sin que se hubiere aportado ningún medio de convicción sobre la asesoría **clara, suficiente y veraz** frente a las **características, regulación del RAIS y su funcionamiento, así como los rasgos diferenciadores con el RPM**, como se afirma en el escrito de contestación por parte de Porvenir S.A., y por el contrario, con lo manifestado en tal acto procesal se desvirtúa este argumento, pues no le consta a la AFP la fecha de nacimiento, ni la afiliación de la demandante al RPM, pese a que en el formulario de vinculación se marcaron **las casillas: ha cotizado más de 150 semanas en ISS o cajas, y en la entidad se indica ISS**, documento que ni siquiera fue consultado para efectos de realizar el pronunciamiento frente a los hechos a pesar de

haberse adjuntado como anexos, lo que implica que no se dio la debida ilustración al momento del tránsito entre regímenes, y tampoco se ha cumplido con el debido acompañamiento a la actora durante su permanencia en el RAIS, sin que pueda considerarse satisfecha la debida información con una simple expresión genérica de características, o con el hecho de que la afiliada no haya demostrado en el transcurso del tiempo inconformidad alguna sobre el cambio en el sistema pensional, sino con la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente, exigiéndose la persuasión certera sobre que la ilustración correspondiera a la realidad y que atendía a las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, a voces del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (en este último aspecto ver sentencia SL843-2022).

Sobre el deber de información en cabeza de las administradoras de pensiones, está definido jurisprudencialmente que el mismo constituye:

... una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de Seguridad Social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CP, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de la política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. Ver sentencia SL4322-2022.

Y,

... en cuanto al deber de información exigible a las AFP, esta Corporación ha considerado que desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones y se concibió la existencia de las AFP, se estableció en cabeza de estas el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas (CSJ SL12136-2014, CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ 2611-2020, CSJ SL4806-2020, entre otras).

Lo anterior, comoquiera que desde la creación de las AFP, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», prescribió en el numeral 1.º del artículo 97 la obligación de las mismas de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado» y la Ley 795 de 2003, «Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones», recalcó en su artículo 21 este

deber preexistente de información a cargo de las AFP, en el sentido que la información suministrada tenía como propósito no solo evaluar las mejores opciones del mercado sino también la de «poder tomar decisiones informadas».

Debiéndose tener en cuenta que:

*...la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, **un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.** Ver, entre otras, sentencias SL1688-2019 y SL5704-2021.*

Y que no se infiere esta del formulario de afiliación con leyenda pre impresa de libertad y voluntariedad, pues,

... la simple firma del formulario de afiliación al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo, son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento exento de vicios, pero no informado (CSJ SL2877-2020).

Ni se sana por actos de relacionamiento – al ser la movilidad entre regímenes un acto expreso-, y menos es posible exigir al afiliado que sea quien se ilustre acerca de la opción que le resulte más benéfica frente a su situación particular, ya que:

... exigir al afiliado una prueba de esta naturaleza es un despropósito, en la medida que la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación. El artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conozca las implicaciones del traslado de régimen pensional. Sentencia SL 4322-2022.

Se precisa, el móvil de obtener una mayor mesada en el RPMPD, se encuentra acorde con el calificativo irrenunciable de la seguridad social, que no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que desde un enfoque material, busca la satisfacción en su totalidad a fin de que los derechos e intereses objeto de protección sean reales y efectivos; *en este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.* Ver sentencias SL8544 y SL 13430 de 2016.

Sumado a que sobre el particular la Sala de Casación Laboral en providencia SL1055-2002, precisó:

Ahora, si bien en el presente asunto uno de los argumentos del accionante fue el relativo a demostrar que su pensión en prima media sería más favorable que en el RAIS, esto de ningún modo debe permitir desviar la atención a lo importante, esto es, verificar si al momento del traslado efectivo el afiliado accedió a una información clara y precisa sobre las ventajas, desventajas y riesgos de cada régimen en los términos explicados. Y tampoco difumina lo anterior el hecho de que la persona no haya retornado a prima media en los términos de ley, pues se reitera, lo que concierne a estos asuntos es constatar el obedecimiento de dicho deber legal de información, independientemente de que la persona tenga o no aquella posibilidad legal de retorno.

Siendo, de acuerdo con la jurisprudencia especializada, la reacción del ordenamiento jurídico frente a la afiliación desinformada, la ineficacia, o exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado, **en los términos de los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993**; lo que conlleva **las siguientes implicaciones: 1. efectos ex tunc** (desde siempre), por tal, las cosas se retrotraen a su estado anterior, como si el acto de traslado jamás hubiera existido. **2. La imprescriptibilidad de la acción**, al tratarse de una pretensión meramente declarativa y por tener igual connotación los derechos que nacen de aquella, pues forman parte del irrenunciable a la

seguridad social y, por tal, puede solicitarse en cualquier tiempo. **3. Obligación de las entidades del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad** a la devolución total de recursos existentes en la cuenta de ahorro individual, incluidos los porcentajes descontados por cualquier concepto, en tanto, desde el nacimiento del acto viciado, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

Frente al particular resulta ilustrativo el siguiente aparte de la sentencia SL4322-2022:

*En esas condiciones, en desarrollo del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, habrá de modificarse el ordinal cuarto del fallo de primer grado, porque se ha dicho por la Sala que como **la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de traslado jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propios recursos, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones; criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.***

En consecuencia, habrá de modificarse el dicho ordinal cuarto del fallo del a quo, en el sentido de que Porvenir SA deberá trasladar a Colpensiones los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante junto con sus rendimientos. De igual modo, la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales en cualquier tiempo, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.

En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen

de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

De acuerdo con ello y por ser el precedente vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, es el acogido por esta Sala de Decisión, sin que existan razones para su variación, máxime cuando el recurso de apelación se funda justamente en los argumentos de defensa ya analizados por la alta Corporación, ni sea una determinación caprichosa, **pues como ya se advirtió se acata el precedente vertical reiterado en más de 3 decisiones que constituyen doctrina probable.** (ver sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022 y SL4322-2022**), **por lo que se confirma** la sentencia revisada en cuanto en relación con los conceptos que se ordenan retornar a Colpensiones, con detalle pormenorizado de la información relevante que los justifiquen.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con los artículos artículo 271 y 272 del mismo estatuto; 48 y 53 de la Constitución Política.

Y finalmente, **en lo atinente a la condena en costas**, es pertinente recordar, que son aquellas erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, dentro de las cuales se incluyen las agencias

en derecho, valor que el juzgador le da al trabajo del abogado que ha triunfado en el trámite del conflicto, que deben ser asumidas por la parte que resulte vencida.


No sobra añadir que la jurisprudencia especializada en forma reiterada ha adoctrinado, que las costas no son consecuencia de un proceder determinado de las partes, de suerte que no interesa para su imposición que se haya actuado de buena o mala fe (CSJ AL4123-2019). Así mismo, se ha establecido que la mentada condena contiene una obligación procesal que se «dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir» (ver autos CJS AL3132-2017, CSJ AL3612- 2017, CSJ AL5355-2017, CSJ AL2924-2022, CSJ AL2952-2022 y CSJ AL5445-2022), razones por las que se mantiene esta condena en primera instancia y en esta corren a cargo de la AFP Porvenir S.A. a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000,00 a favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **adicional el numeral segundo de** la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Emperatriz Franco Márquez**, contra la **AFP Porvenir S.A., y Colpensiones**, para indicar que en caso de haberse descontado dinero para el fondo de solidaridad pensional, tal concepto también debe ser retornado a Colpensiones debidamente indexado. **En lo demás se confirma la sentencia.**

Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** a favor de la demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO